

El 22 de noviembre pasado, unas personas se pasearon por El Pla de Santa Maria haciendo una encuesta sobre residuos industriales. El alcalde se enteró así de que algo podía tramarse, pero ni el alcalde ni el presidente del Consell Comarcal de l'Alt Camp supieron nada hasta que el conseller Molins les citó el pasado día 9 de enero para decirles que la Generalitat había elegido el Pla de Santa Maria para instalar allí una gran planta incineradora de residuos industriales. Ante la lógica sorpresa de sus interlocutores, el conseller hizo saber que la decisión era inapelable. Es exactamente como no deberían hacerse las cosas si hubiera un mínimo de sensibilidad. No es extraño que la población ande revuelta ante este asunto y que representantes de to-

EDITORIAL

Incineradora inapelable

das las entidades hayan expresado su rechazo. El alcalde no oculta su malestar y el Consell Comarcal habla de «sorpresa, consternación, alarma, preocupación...» ¿Acaso establecer una planta así debe hacerse como si lo que se pusiera fuera una cárcel o un polígono de tiro? Estamos ante un caso no sólo de prepotencia, sino de desprecio hacia la autonomía municipal y la opinión de un

pueblo. La Generalitat ha actuado torpemente en la forma, y esperemos que no en el fondo.

Se trata de traer al Alt Camp miles de toneladas de residuos, la mayor parte de los cuales se producen en el área de Barcelona, y nos enteramos cuando ya está tomada la decisión. ¿No deberá ser la gente del Alt Camp la que vea pasar, arriba y abajo, centenares de camiones con basura industrial?, ¿no será ella la que respire la contaminación, poca o mucha, que genere esta gran planta de incineración?. En El Pla de Santa Maria pretende instalarse Identirama, que refleje la identidad de Catalunya. La de nuestras comarcas quedará bien identificada: petroquímica, nucleares y basuras industriales.